

# REVISTA DE DERECHO

AÑO XVII

ABRIL - JUNIO DE 1949

N.º 68

DIRECTOR: SR. ORLANDO TAPIA SUAREZ

## COMITE DIRECTIVO:

SRES.

ROLANDO MERINO REYES

QUINTILIANO MONSALVE J.

JUAN BIANCHI BIANCHI

VICTOR VILLAVICENCIO G.

MARIO CERDA MEDINA

ESCUELA TIPOGRAFICA SALESIANA - CONCEPCION

## CORTE DEL TRABAJO DE IQUIQUE

**CHILE EXPLORATION COMPANY**

**CON HECTOR RIOS ASPEE Y OTROS**

**NULIDAD DE PLIEGO DE PETICIONES**

EMPLEADO PARTICULAR — PLIEGO DE PETICIONES — CONFLICTO COLECTIVO — DEMANDANTE — DEMANDADO — CUESTION CONTENCIOSA — TRIBUNALES DEL TRABAJO — COMPETENCIA — JUNTA DE CONCILIACION — FALTA DE RESOLUCION DE LA JUNTA — LEGALIDAD E ILEGALIDAD DE UN CONFLICTO COLECTIVO — LEY N.º 7.295 — PROHIBICION RELATIVA A PLIEGOS DE PETICIONES QUE SUPONEN AUMENTO SUELDOS REAJUSTADOS — ALCANCE DE ESTA PROHIBICION — INDEPENDENCIA DE CADA PETICION CONTENIDA EN UN PLIEGO — SITUACION EN CASO DE NULIDAD DE UNA O MAS PETICIONES — EL PLIEGO NULO EN PARTE, PRODUCE CONFLICTO COLECTIVO CON RELACION A LAS PETICIONES VALIDAS CONTENIDAS EN EL — AUMENTOS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES Y PRESUPUESTOS — PETICIONES RELATIVAS A PERSONAS EXTRAÑAS A LA EMPRESA O INDUSTRIA — PETICIONES QUE IMPLICAN REFORMAS LEGALES O REGLAMENTARIAS — REGLAMENTO INTERNO — PETICIONES SOBRE CUESTIONES RESUELTAS EN FALLO ARBITRAL EN ACTUAL VIGENCIA — PETICIONES QUE ALTERAN AVENIMIENTO CELEBRADO POR LAS PARTES EN CONFLICTO EN FORMA DIRECTA O ANTE LA JUNTA DE CONCILIACION — PETICIONES DE ORDEN ECONOMICO-SOCIAL TOTALMENTE AJENAS AL CONTRATO Y A LAS CONDICIONES DE VIDA Y MODALIDAD DE TRABAJO DE LA EMPRESA — EXISTENCIA O INEXISTENCIA JURIDICA DE UN CONFLICTO COLECTIVO — REQUISITOS LEGALES Y REGLAMENTARIOS — PETICIONES CUYA ATENCION COMPETE AL ESTADO, MUNICIPIO U OTROS ORGANISMOS.

**DOCTRINA.** — Habiéndose suscitado controversia, acerca de si las peticiones formuladas por los empleados particulares de la demandante han sido capaces de producir un conflicto colectivo legal de aquellos que trata el Código del Trabajo, — ya que en la

demanda se expresa que el pliego de peticiones es ilegal y que no existió tal situación jurídica, lo que es negado en absoluto por los demandados, — se ha producido una cuestión contenciosa relativa a la aplicación de las disposiciones legales sobre conflictos co-

lectivos contenidas en el Código del Trabajo, la que, de conformidad con el N.º 1.º del artículo 497 (418) del mismo Código, debe ser resuelta por el Juzgado del Trabajo competente, atendido el impasse producido en la Junta de Conciliación.

El procedimiento que se deriva de las disposiciones legales y reglamentarias, en materia de competencia, es el siguiente: corresponde a la Junta de Conciliación respectiva el pronunciamiento, y sólo cuando no se reúna el quórum necesario para hacer dicho pronunciamiento —como ocurre en caso de empate de votos— o cuando alguna de las partes no esté conforme con lo resuelto por la Junta en esta materia, corresponde a los Tribunales del Trabajo dilucidar la cuestión acerca de la legalidad o ilegalidad del planteamiento del conflicto y de los efectos jurídicos de éste, sin que ello importe interferencia en las facultades de la Junta, puesto que, prácticamente, no se habría incoado el proceso de conciliación del conflicto.

El alcance del artículo 40 de la Ley 7295 es, simplemente, el de prohibir a los Empleados Particulares a que se refiere dicha ley, que presenten pliegos de peticiones solicitando aumentos de las remuneraciones reajus-

tadas. No tiene, pues, este precepto un carácter amplio, en el sentido de que esos empleados particulares no puedan provocar un conflicto colectivo, aun cuando éste se refiera a materias que no se encuentran relacionadas con sueldos y demás remuneraciones anexas.

Cada una de las peticiones contenidas en el pliego es un hecho independiente de las demás y puede ser estudiada y tratada separadamente de las otras. La ilegalidad de algunas peticiones no importa la ilegalidad de todo el pliego. De ello se infiere que, alegándose solamente la ilegalidad de algunas de las peticiones, debe rechazarse la demanda en cuanto solicita que se declare que el pliego es ilegal y nulo en su totalidad; y, como consecuencia de esto, debe desecharse, asimismo, en cuanto se pide en ella que se declare que el pliego en cuestión no ha producido la existencia de un conflicto colectivo.

El artículo 40 de la Ley 7295 prohíbe a los empleados particulares presentar pliegos colectivos de peticiones solicitando mejoramiento de las remuneraciones reajustadas y, en consecuencia, las peticiones contenidas en el pliego referentes a aumentos de sueldo y todas las demás que signifiquen por cualquier medio un

## NULIDAD DE PLIEGO DE PETICIONES

265

aumento de las remuneraciones de los demandados, o que tiendan a aumentar los presupuestos de éstos, evitándoles incurrir en los respectivos gastos, adolecen del vicio de ilegalidad y no han podido provocar un conflicto colectivo.

No han debido ser presentadas por los demandados las peticiones que se refieren a una persona totalmente extraña a la Compañía demandante.

No son procedentes las peticiones contenidas en el pliego, en las cuales se plantean cuestiones de derecho que importan introducir reformas legales o reglamentarias (con exclusión del reglamento interno), ya que sólo incumbe al legislador o colegislador dictar normas de esta naturaleza con fuerza obligatoria dentro de una empresa. La negativa del empleador a acceder a las reformas que en tal sentido se solicitaren, se encontraría amparada por la misma ley, que solamente lo obliga a cumplir con las disposiciones legales y reglamentarias vigentes.

No son procedentes, tampoco, las peticiones que se presentan durante la vigencia de un fallo arbitral, en todas aquellas cuestiones que hubieren sido resueltas en el laudo respectivo; ni las que alteren, mientras esté rigiendo, el avenimiento a que hubieren llega-

do las partes en conflicto ante la Junta de Conciliación o en forma directa.

No son susceptibles de provocar un conflicto colectivo, aquellas peticiones de orden económico-social que no digan relación directa ni indirecta con el vínculo contractual ni con las condiciones de vida y modalidad de trabajo que rigen dentro de la empresa.

Son ilegales los pliegos de peticiones que se presentan sin haberse cumplido con los requisitos establecidos por la Ley y el Reglamento, o aquellos en que se hubieren omitido los trámites previos, porque dichos requisitos y trámites atañen directamente a la existencia o inexistencia jurídica del conflicto.

Son improcedentes, también, las peticiones contenidas en el pliego de peticiones y cuya atención corresponde al Estado, Municipios u otros organismos.

### **Sentencia de Primera Instancia**

Calama, veinte de Enero de mil novecientos cuarenta y nueve.

Vistos:

A fojas 19 el señor Douglas M. Dumbar, ingeniero domiciliado

en Chuquicamata, casa 1310, en representación de Chile Exploration Company, Sociedad Minera, entabla demanda en juicio del trabajo en contra de sus Empleados Particulares, solicitando en primer término que se declare que el pliego de peticiones presentado por los demandados el 3 de Noviembre de 1948 es ilegal, nulo y sin valor, y que como consecuencia de la declaración que sobre el particular debe hacer el Tribunal se establezca que dicho pliego de peticiones no ha producido la existencia de un conflicto colectivo. En subsidio de estas peticiones, la parte demandante solicita que se declare que son ilegales las peticiones indicadas en el N.º 6 de la demanda o las que el Tribunal considere ilegales, y que por tanto dichas peticiones deben ser eliminadas del citado pliego, retrotrayéndose el conflicto al estado de contestar el pliego de peticiones. Además, solicita la demandante que se condene en costas a los demandados.

Fundamentando la demanda, la actora expresa que sus Empleados Particulares que trabajan en Chuquicamata le presentaron el pliego de peticiones que acompaña, en el cual designaron a los señores Héctor Ríos Aspee, Juan Argandoña Cortés, Segundo Callejas Guerrero, Luis Pinto Boyd

y Gustavo Cordero Zúñiga como miembros de la delegación a que se refiere el artículo 590 del Código del Trabajo. Este pliego fué rechazado por ser ilegal ya que contiene numerosas peticiones ilegales. Como los empleados se negaran a retirar el pliego, su parte provocó la cuestión previa de ilegalidad del pliego ante la Junta de Conciliación organismo que no resolvió dicha petición ya que se produjo empate al respecto, según consta del certificado que acompaña. Es por este motivo que se ha entablado esta demanda, a fin de que el Tribunal haga las declaraciones que se han mencionado en líneas anteriores.

El Tribunal tiene amplia competencia para conocer de esta materia, conforme a lo prescrito en el N.º 1 del artículo 497 del Código del Trabajo, ya que la dificultad que se ha producido sobre la ilegalidad del pliego de peticiones es una cuestión de carácter contencioso que se ha suscitado por la aplicación de las disposiciones del Código del Trabajo.

El hecho de que numerosas de las peticiones son contrarias a lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley 7.295 demuestra evidentemente que el pliego es ilegal. Esta disposición prescribe que los empleados, para los cuales rigen los reajustes establecidos en la



## NULIDAD DE PLIEGO DE PETICIONES

267

Ley 7.295, no podrán presentar pliegos colectivos de peticiones solicitando mejoramiento de las remuneraciones reajustadas, sino después de transcurrir un año de la fecha del último reajuste. El último reajuste de los sueldos de los demandados se efectuó el primero de Enero del presente año, por lo que los empleados no han podido legalmente presentar un pliego de peticiones, pidiendo aumento de remuneraciones, siendo, por tanto, dicho pliego ilegal, nulo y sin valor, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 10 del Código Civil.

Debe considerarse que el acto prohibido por la ley, es la presentación del pliego de peticiones, por lo cual la nulidad afecta al pliego en su totalidad.

Las peticiones ilegales son todas las que persiguen, en cualquiera forma, una mejoría económica para el empleado, ya sea, por significar un aumento en sus entradas o evitarle cualquier gasto, ya que, establecida la Ley 7.295, fija ésta aumentos anuales de los sueldos, a raíz de la fijación de los sueldos vitales y reajuste ordenado por el artículo 18 de la Ley 7.295, se ha querido evitar que el empleador tenga otros gravámenes, además de los que establece la ley citada. El pliego de peticiones contiene numerosas

peticiones que son ilegales por las causas que se ha citado, como ser: 1.o—Sobre aumento de un treinta por ciento de los sueldos; 2.o—Sobre un diez por ciento de aumento anual en todos los sueldos; 3.o—13, sobre establecimiento de nuevos bonos o aumento de los existentes; 14 y 15, sobre indemnizaciones especiales en caso de accidentes del trabajo; 17 y 18, sobre indemnizaciones en caso de terminación de contrato, indemnización de años servidos, pasajes y fletes; 19, sobre asignación para estudiantes; 30, 36 sobre beneficios de pulpería; 28, sobre asignación de casa, etc., etc.

Como basta que el pliego contenga una sola petición de esta clase para que sea ilegal o nulo y la ilegalidad de las peticiones citadas, es evidente, la declaración de nulidad del pliego de peticiones es procedente desde todo punto de vista.

Además, el referido pliego es ilegal por contener peticiones improcedentes, es decir, que no son susceptibles de producir un conflicto colectivo y peticiones que no pueden provocarlo. La institución del conflicto colectivo, fruto de la Ley, no puede afectar ni a las leyes vigentes, ni a los derechos que ella consagra, debien-

do funcionar sin afectar a la legislación vigente ni al régimen jurídico general. Por otra parte, destinada a funcionar dentro del radio de las relaciones del empresario y del obrero o empleado, no puede tener por objeto peticiones extrañas a dichas relaciones. En resumen, los asalariados, en virtud de la institución del conflicto colectivo gozan del derecho de formular peticiones a sus patrones o empleadores, pero ellas deben referirse a materias propias del contrato de trabajo y encuadrarse dentro del régimen legal existente.

Diversos fallos arbitrales han venido recientemente a establecer la corriente doctrinaria sobre el alcance de las peticiones que pueden formular los obreros o empleados, y podría sintetizarse la doctrina sentada por estos fallos en esta forma; son improcedentes en un pliego de peticiones las siguientes: **Grupo A.**—Que se refieren a materias ya cubiertas o resueltas por la Ley; **Grupo B.**—Que se refieren a obligaciones que sólo la Ley puede crear o establecer; **Grupo C.**—Que se refieren a materias o asuntos extraños al contrato de trabajo; y **Grupo D.**—Que se refieren a materias propias de las facultades de otras reparticiones públicas o autoridades.

A estos grupos de peticiones ilegales o improcedentes debe agregarse el referente a materias que son propias de las facultades o derechos del empresario, en su calidad de dueño, que no pueden quedar sujetos a las contingencias de un conflicto colectivo, y que se denominará con la letra e). La inclusión de cualquiera petición de las clases indicadas produce la nulidad total del pliego de peticiones, ya que este documento es un todo indivisible, porque la aprobación prestada a él por los empleados en la votación respectiva se refirió a su totalidad, de tal manera que la ilegalidad de una petición afecta a todo el pliego.

En consecuencia, basta para fundar la solicitud de ilegalidad total del pliego el citar algunas de las peticiones ilegales. Ellas son: **Grupo A.**—Petición 2, cambio de los aumentos anuales y trienales establecidos en la Ley 7.295; peticiones 14, 16, 17 y 47, letra e). **Grupo B.**—Pertenecen a este grupo las mismas peticiones indicadas en el grupo a), ya que los beneficios solicitados en ellas sólo pueden establecerse en virtud de la Ley. **Grupo C.**—Peticiones N.os 2, 26, 30, 36, 37, 40, 43 y 49. Las peticiones que pueden producir un conflicto colectivo sólo son aquellas que persi-

## NULIDAD DE PLIEGO DE PETICIONES

269

guen el mejoramiento de las relaciones contractuales entre las partes. **Grupo D.** — Peticiones N.os 37 y 43. **Grupo E.** — Peticiones N.os 28, 30, 36, 37, 42, 44, etcétera.

Fundado en lo expuesto, la demandante solicita en esta demanda, que se declare la ilegalidad o nulidad total del pliego de peticiones de los empleados particulares de Chuquicamata.

En subsidio de esta petición, solicita que se declaren ilegales las peticiones que enumera a continuación, fundado en las razones indicadas anteriormente:

**A. — Peticiones contrarias al artículo 40 de la Ley 7.295.** — 1) Aumento de un treinta por ciento a los sueldos; 2) Aumento anual de un diez por ciento, en vez de aumentos de tres y diez por ciento; 3.o) como bono de reemplazo, pago total de la diferencia de sueldo; 4.o) aumento de un cincuenta por ciento para todos los bonos y premios; 5.o) aumento del bono de movilización; 6.o) bonos para los recaudadores de pulperías; 7.o) bono de veinticinco pesos diarios para personal de maquinistas de transportación de la planta y mina; 8.o) bonos como jefes de guardia, a secciones, panadería, garage y lavandería; 9.o) como movilización \$ 20.—

diarios a empleados residentes en Calama; 10.o) bono \$ 20.— diarios a empleados de segundo turno; 11.o) relativo a comienzo del segundo y tercer turno, para los efectos del pago especial para esos turnos; 12.o) bono \$ 20.— diarios para todos los empleados de la mina; 13.o) bono diario \$ 50.— para los empleados con recorrido nocturno; 14.o) indemnización \$ 50.000.— para los parientes, etc., en caso de muerte o accidentes del trabajo; 15.o) indemnización de \$ 50.000.— en caso de accidentes del trabajo por incapacidad total o enfermedad profesional; 16.o) aumento pago a empleados enfermos o incapacitados para el trabajo; 17.o) indemnización seis meses de sueldo o indemnización años servidos a empleados despedidos por la empresa, más pasajes y fletes; 18.o) pasajes y fletes para empleados que se retiran voluntariamente, con más de tres años de servicios. Con más de diez años, además, indemnizaciones de sueldos por cada año servido; 19.o) aumento de asignación para estudiantes; 20.o) bono \$ 600.—, niveladores, ingenieros mina; 21.o) bono \$ 500.— empleados polvoreros mina; 22.o) bono \$ 23.— diarios conductores transportación planta; 25.o) pasajes para empleados acogidos a medicina preventiva;



28.o) clasificación a empleados pues tiende a aumentar los sueldos; 30.o) máximo tarjetas racionamiento pulpería sean destinados sólo para artículos de abarrotes, carnes y comestibles, pues significa aumentar beneficios pulperías en esos artículos, ya que ahora el máximo se distribuye entre esos artículos y los de tienda y mercadería. Mayor distribución económica; 31.o) nuevo máximo para artículos de tienda y mercadería. Significa aumento beneficios pulpería. Mayor retribución económica; 33.o) racionamiento a familiares. Igual observación que en los números 30 y 31; 34.o) conservación para racionamiento para familiares fuera del mineral. Igual observación; 35.o) racionamiento para hijos estudiando fuera de Chuquicamata. Igual observación; 36.o) racionamiento a todos los empleados fuera del mineral y que no hayan recibido casa. Igual observación; 38.o) aumento de asignación de casa a \$ 500.—; 40.o) cocina eléctrica; 42.o) atención médica y medicinas para familiares que están fuera de Chuquicamata; 45.o) tarifas reducidas en caso de reposo; 46.o) servicio gratuito de funerales; 47.o) pasajes gratuitos a empleados en caso de vacaciones; 50.o) materiales para trabajos dentales; 52.o) sueldos para empleados de laborato-

rios; 53.o) locomoción para empleados del kilómetro 6; 54.o) sueldo para oficina ingenieros, departamentos plantas;

**B) Peticiones referentes a materias ya cubiertas por la ley.—**

2.o) Cambio de los aumentos anuales y trienales establecidos por la ley 7.295; 14.o) indemnización de \$ 50.000.— en caso de muerte por accidentes del trabajo. Las indemnizaciones están indicadas en el Código del Trabajo; 15.o) indemnización de \$ 50.000 en caso de incapacidad total por accidente del trabajo o enfermedad profesional. Igual observación; 16.o) pago de sueldos a empleados enfermos o incapacitados por accidente del trabajo. Las obligaciones en uno y otro caso están indicadas en el Código del Trabajo; 17.o) la indemnización de años servidos, indemnización de seis meses, pasajes y fletes, en caso de despido de un empleado. Las obligaciones en caso de desahucio, pasajes y fletes están contenidas en el Código del Trabajo. La Ley 7.295 se refiere al fondo de indemnización por años servidos; 18.o) pasajes y fletes para empleados que se retiran voluntariamente. Indemnización de años servidos para los empleados que en tal caso tengan más de diez años de servicios; igual

## **NULIDAD DE PLIEGO DE PETICIONES**

**271**

observación que en número anterior; 24.o) establecimiento del sábado inglés. El artículo 323 del Código del Trabajo estableció el sábado inglés, pero sólo para los establecimientos comerciales y no para las industrias, como es Chuquicamata; 47.o) beneficios en caso de vacaciones. Las obligaciones de la Compañía están fijadas en el Código del Trabajo.

**C) Peticiones referentes a materias que sólo la ley puede crear o establecer.**—Son las mismas indicadas en la letra anterior.

**D) Peticiones referentes a materias o asuntos extraños al contrato de trabajo.**—23.o) casa para los empleados que contraigan matrimonio; 26.o) pavimentación de terrenos, techos, etc.; 27.o) control de empleados que tienen casas o que se cambian; 29.o) envío de dinero por medio de Compañía; 30.o) a 36.o) sobre beneficios de pulpería; 37.o) construcción de casas; 38.o) asignación de casa; 39.o) pintura de casas, lavaplatos, etc.; 40.o) cocinas eléctricas; 41.o) conservar casas mientras la familia esté fuera de Chuquicamata; 42.o) atención médica para familiares fuera de Chuquicamata; 43.o) construcciones de servicios hospitalarios; 44.o) aumento planta de médicos;

45.o) casa de reposo en Antofagasta y Tocopilla; 46.o) servicio gratuito de funerales; 49.o) casa habitación y otros beneficios para dentista del Sindicato, quien no es un empleado de la empresa; 50.o) materiales servicio dental Sindicato; 51.o) construcción clínica dental.

**E) Peticiones referentes a materias propias de las facultades de otras reparticiones públicas o autoridades.**—37.o) sobre construcción de habitaciones; 39.o) pintura de casas, lavaplatos, etc; 43.o) sobre construcciones de servicios hospitalarios; 44.o) sobre aumento de la planta de médicos; 46.o) sobre servicio gratuito de funerales; y 51.o) sobre construcción de una clínica dental.

**F) Peticiones que afectan a facultades privativas del empresario.**— 28.o) clasificación de empleados; 29.o) envío de dinero por medio de la Compañía; 30.o) a 36.o) sobre ampliación de los beneficios de pulpería; 37.o) construcción de casas; 38.o) aumento de asignación de casa; 39.o) pintura de casas, etc.; 40.o) cocinas eléctricas; 41.o) conservación de la casa; 42.o) atención médica; 43.o) construcción de servicios hospitalarios; 44.o) aumento de la planta de médicos;

45.o) casa de reposo en los puer-  
tos; 46.o) servicio gratuito de fu-  
nerales; 47.o) pasajes gratuitos;  
49.o) casa y otros beneficios para  
un dentista extraño a la empresa;  
50.o) materiales para el servicio  
dental; 51.o) construcción de una  
clínica dental; 53.o) locomoción  
gratis para los empleados.

Termina solicitando se tenga  
por interpuesta la presente de-  
manda en contra de los Emplea-  
dos Particulares de Chile Explo-  
ration Company que trabajan en  
Chuquicamata, representados por  
los señores Héctor Ríos Aspee,  
Juan Argandoña Cortés, Edmun-  
do Callejas Guerrero, Luis Pinto  
Boyd y Gustavo Cordero Zúñiga.  
Todos empleados particulares,  
domiciliados en Chuquicamata.  
E - 2043, F - 202, K - 2003, F -  
2037 y los 400 N.º 409, respecti-  
vamente y hacer las declaracio-  
nes que se mencionaron al co-  
menzar la exposición de esta de-  
manda.

Se celebró el comparendo de  
rigor a fojas 33, habiéndose rati-  
ficado la demanda por la deman-  
dante.

La demandada, contestando,  
opuso en primer término la excep-  
ción de incompetencia del Tribu-  
nal para conocer de esta causa.

La funda en que, de conformi-  
dad con lo prevenido en el ar-  
tículo 519 del Código del Traba-  
jo, el único organismo compe-  
tente para conocer de los pliegos  
de peticiones y de las materias  
que digan relación con él es la  
respectiva Junta de Conciliación  
del Departamento. No puede dis-  
cutirse esto porque la disposición  
legal citada es muy amplia y a-  
barca todas las materias que di-  
gan relación con los conflictos  
colectivos.

Por otra parte, es principio de  
Derecho Procesal, y está estable-  
cido en el artículo 111 del Cód-  
igo Orgánico de Tribunales, que  
los Tribunales u organismos com-  
petentes para conocer de un a-  
sunto, lo son igualmente para co-  
nocer de todas las incidencias que  
en él se promuevan. De este claro  
principio se desprende que la Jun-  
ta de Conciliación tiene compe-  
tencia para conocer de la proce-  
dencia o improcedencia de un  
pliego, o para cualquiera otra ma-  
teria que se suscite en la discu-  
sión de un conflicto colectivo.

La competencia que hace valer  
la contraria, de los Tribunales  
del Trabajo, fundada en el ar-  
tículo 418 del Código del Traba-  
jo, no tiene valor, por ser ésta  
una discusión de carácter gene-  
ral, mientras que la competencia  
de la Junta de Conciliación ema-

## NULIDAD DE PLIEGO DE PETICIONES

273

na de una disposición especial, que, como tal, debe primar sobre la ley general. Por otra parte, la historia fidedigna del establecimiento de la ley confirma el argumento de que la única competente para conocer de esta materia es la respectiva Junta de Conciliación.

Según la Ley 4.056, las Juntas de Conciliación eran competentes para conocer, tanto de los conflictos individuales como de los colectivos. El hecho de que posteriormente el Decreto-Ley 2.100 haya entregado los conflictos individuales a los Tribunales ordinarios del Trabajo, para dejarle a las Juntas exclusivamente lo relacionado con las dificultades colectivas, indica claramente que los Jueces del Trabajo nada tienen que ver con estas materias y, especialmente con la que se ha planteado en autos.

Finalmente, la misma contraria, nos da la razón de esta tesis —expresa la demandada— con el proceder que observó en la Junta de Conciliación. La demandante se presentó y promovió ante la Junta esta misma materia que ahora pretende trasladar ante el Tribunal de US. Pero no ha reparado que recurriendo ante la Junta y estimando la competencia para conocer de este asunto, se ha radicado con arreglo a la ley el

conocimiento de este negocio, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 109 del Código Orgánico de Tribunales, y esta competencia no puede alterarse por causas sobrevinientes. El empate producido en la Junta de Conciliación no autoriza el traslado del asunto ante el Tribunal del Trabajo. La competencia es exclusiva y excluyente y en todo caso habiendo prevenido la Junta de Conciliación en el conocimiento de este asunto, cesa cualquiera competencia que quisiera buscarse ante otro Organismo o Tribunal, de acuerdo con el claro precepto establecido en el artículo 112 del Código Orgánico de Tribunales.

Por las razones dadas, el Tribunal debe declararse absolutamente incompetente para conocer de este negocio y declarar, que es nulo por este motivo todo lo obrado en este juicio.

En subsidio de lo anterior, los demandados vienen en solicitar que se declare sin valor ni efecto todo lo obrado, por cuanto la ley no ha establecido recurso alguno en contra de las actuaciones o resoluciones de la Junta de Conciliación y al no estar autorizado por la ley, el Tribunal debe inhibirse de conocer de un asunto como el planteado en estos autos, que ha sido conocido y discutido ante la Junta de Conciliación del



Departamento. Por el contrario, el artículo 66 del Reglamento N.º 839, sobre Conflictos Colectivos, dictado por expreso mandato del artículo 564 del Código del Trabajo, prohíbe interferir las facultades y las competencias de las Juntas de Conciliación durante el proceso de conciliación.

Los actos que la ley prohíbe, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 10 del Código Civil, son nulos y sin ningún valor, y en virtud de estas disposiciones el Tribunal debe abstenerse de seguir conociendo esta causa y debe ordenar que se deje sin efecto todo lo obrado en ella.

Aunque a la demandada no le merece dudas la incompetencia del Tribunal para conocer del presente juicio, quiere colocarse en el caso remoto o hipotético de que el Tribunal se declare competente, por lo que entra a contestar el fondo de la demanda.

La petición de la demandante de que se declare ilegal o nulo la totalidad del pliego, carece de todo fundamento legal. El artículo 40 de la Ley 7.295, no contiene la prohibición de presentar pliegos colectivos de peticiones, sino solicitar mejoramiento de las remuneraciones reajustadas dentro de dichos pliegos, lo que es fundamentalmente diferente. Por otra parte, hay preceptos legales

que establecen que el pliego no forma un solo cuerpo o constituye un solo derecho indivisible. Es así como el artículo 44 del Reglamento 839 permite a la Junta desglosar y clasificar las peticiones formuladas en el pliego y las que caigan dentro del grupo primero que allí se establecen, salen precisamente del conocimiento de la Junta para ir a la Inspección del Trabajo para que este organismo exija su cumplimiento. Esta es una prueba palpable y salida de un precepto legal de que el legislador no considera el pliego de peticiones como un solo todo y orgánico sino que toda petición constituye un hecho diferente susceptible de ser desglosado, analizado y discutido con independencia de los demás. Por consiguiente, la petición de la contraria, referente a que se declare la ilegalidad o nulidad total del pliego por considerar que hay supuestas peticiones ilegales, carece de toda base y debe ser rechazada de plano.

Respecto a determinar si hay o no peticiones ilegales, debe establecerse que la única disposición legal que se refiere a esta materia es el artículo 40 de la Ley 7.295 y que dice relación estrecha con las peticiones sobre mejoramiento de las remuneraciones reajustadas, que no son otras



## **NULIDAD DE PLIEGO DE PETICIONES**

**275**

que la misma ley ha establecido como reajuste obligatorio. En ninguna otra parte, la ley ha establecido un tope a las peticiones que pueden plantear los empleados, y que son susceptibles de producir un conflicto colectivo. Por el contrario, el artículo 44 del Reglamento sobre Conflictos Colectivos y los que se refieren a mero cumplimiento de los preceptos legales. La citada disposición expresa que son peticiones, materia de conflicto y que debe conocer la Junta las que importen reivindicaciones económico - sociales que la ley no imponga o determine y que están entregadas a la voluntad de las partes en conflicto. Si no hay disposición legal, salvo la establecida en el artículo 40 de la Ley 7,295 que corte o prohíba a los empleados hacer peticiones a sus patrones, se verá que no tiene base legal en qué fundarse la contraria para establecer por sí y ante sí diversos grupos de límites en el derecho de presentar peticiones que el legislador no ha establecido ni ha señalado en parte alguna.

El legislador no ha prohibido presentar peticiones de las que se analizan en los grupos a), b), c), y e), en la demanda de autos y si la ley no los prohíbe, sino que por el contrario, los autoriza expresamente en virtud del ya cita-

do artículo 44 del Reglamento 839, se ve claramente que no puede penarse con la nulidad la presentación de estas peticiones y menos declararse su nulidad.

Según los preceptos y principios que rigen la nulidad de los actos jurídicos, sólo pueden ser declarados nulos los actos en que la ley haya establecido esta sanción. Ninguna doctrina ni argumentación alguna puede alterar este precepto y este principio, y debe desecharse la tesis de la contraria porque viola, tanto las disposiciones como los principios sobre la materia. Si se analiza los diversos grupos creados por la demandante en los que clasifica las peticiones del respectivo pliego, debe llegarse a la curiosa teoría de que los empleados sólo pueden presentar peticiones de aquellas establecidas por la ley y exigir el cumplimiento de las obligaciones que el mismo legislador impone a los patrones. Esta teoría está desvirtuada por el tantas veces citado artículo 44, que establece que estas materias no deben ser conocidas por la Junta de Conciliación y que deben ser elevadas al conocimiento de la respectiva Inspección del Trabajo. Por otra parte, el mismo legislador se va encargando de establecer qué materias son susceptibles de conflictos, porque quedan

entregadas al arbitrio de las partes diversas materias sobre las cuales el legislador hace exigencias mínimas a los patrones, dejando el campo abierto para que éstos lleguen a proporcionar, precisamente, mediante peticiones de los empleados, condiciones u obligaciones mayores que las que impone el legislador. Sin ir más lejos, el artículo 20 de la Ley 7.295 prescribe formas especiales de reajustes y remuneraciones que pueden establecerse en favor de los empleados y que sean más favorables que las establecidas por el legislador. Esta disposición quita todo viso de supuesta ilegalidad que cree ver la contraria en los números 1 y 2. del pliego de peticiones acompañado a la demanda. El artículo 264 del Código del Trabajo, permite expresamente estipular indemnizaciones mayores que las establecidas por la ley, para el caso de accidentes del trabajo, haciendo caer de su base la petición de ilegalidad que hace la contraria de los N.os 14 y 15 del pliego de peticiones.

Las argumentaciones anteriores hacen ver de que no es posible declarar la nulidad o ilegalidad de las peticiones que la contraria ha agrupado bajo las letras a) y b) de su demanda.

En cuanto a las peticiones señaladas en los grupos c), d) y e), ellas no son contrarias a la ley ni son extrañas al contrato de trabajo celebrado entre las partes. Como es público y notorio, la demandante proporciona a sus empleados casa habitación, servicio médico hospitalario y otras regalías que la contraria ha señalado en otras oportunidades como condiciones especiales del medio de vida del mineral. Estas peticiones tienen relación estrecha y se derivan de la prestación de los servicios y, por ende, del contrato de trabajo y están destinadas a mejorar o a ampliar regalías provenientes de los mismos servicios prestados y del mismo contrato de trabajo. Por lo demás, dichas peticiones pueden hacerse, también, en virtud de la amplitud con que el legislador autoriza para hacer peticiones de toda índole, según ya se ha expresado.

Termina la demandada solicitando que se declare la incompetencia absoluta del Tribunal para conocer de esta causa, o, en subsidio, que se declare nulo y sin valor todo lo obrado en este juicio en virtud de que la ley no ha establecido recurso alguno en contra de las actuaciones o resoluciones de la Junta de Conciliación, ya que el legislador prohíbe interferir las actuaciones de dicha

## NULIDAD DE PLIEGO DE PETICIONES

277

Junta en el trámite de la conciliación, debiendo el Tribunal ordenar el archivo de los antecedentes, o, en subsidio, de las peticiones anteriores, desechar la demanda interpuesta en estos autos en todas y cada una de las peticiones que aquí se hacen, negando lugar a la demanda en todas sus partes con expresa condenación en costas.

Contestando la excepción de incompetencia, la demandante pide su rechazo, fundada en primer término en el hecho de que el demandado, al oponer esta excepción, no indicó cuál Tribunal era el competente para conocer de este asunto, limitándose a expresar que el conocimiento de esta cuestión correspondía a la Junta de Conciliación, pero dicho organismo no es un Tribunal, ya que carece de todas las facultades propias de un Tribunal. Es así que la contraria no ha cumplido con lo prescrito en el artículo 111 del Código de Procedimiento Civil, pues no ha indicado un Tribunal que él estima competente para conocer de esta causa. Al quitar a este Tribunal el conocimiento de este juicio, no habría Tribunal alguno que pudiera conocerle y fallarlo. Debe llegarse, por lo tanto, a la conclusión forzosa de que, versando este juicio

sobre una cuestión relativa a la aplicación de disposiciones del Código del Trabajo, el único Tribunal competente es el Juzgado del Trabajo, de conformidad con lo prevenido en el número 1.º del artículo 499 del Código del Trabajo.

Al contrario de lo que expresa la demandada, en este juicio no se pretende que el Tribunal conozca el conflicto existente entre las partes en la forma que corresponde a la Junta de Conciliación, sino que se litiga sobre la nulidad del pliego de peticiones, o sea, se trata de una cuestión contenciosa que debe conocer y juzgar un Tribunal. En esta forma, el Juzgado no ha interferido en las facultades de la Junta de Conciliación por lo que no hay infracción a lo dispuesto en el artículo 76 del Reglamento sobre Conflictos Colectivos y no tiene aplicación, en consecuencia, lo prescrito en el artículo 10 del Código Civil, relativo a la nulidad de los actos que la ley prohíbe, nulidad que sería improcedente porque el artículo 76 es una mera disposición reglamentaria y trata, además, de una materia no indicada en la ley que reglamenta, o sea, excede el texto legal y por lo tanto, es nula y sin valor. El hecho de que mi parte solicitó que la Junta de Conciliación declarase nulo el

pliego, no ha producido el efecto que indica la contraria, o sea, el de radicar en dicha Junta el conocimiento del asunto por la sencilla razón de que dicho organismo no es un Tribunal, en tanto, que el artículo 109 del Código Orgánico de los Tribunales, citado por la contraria, se refiere a la radicación de un asunto ante el Tribunal competente.

Tampoco se trata de interposición de un recurso, ya que no se ha reclamado de una resolución o acuerdo de la Junta de Conciliación, sino que se ha solicitado del Tribunal en forma directa que declare la nulidad del pliego de peticiones, debiendo tenerse presente sobre esto, además, que los recursos proceden sólo en las causas seguidas ante los Tribunales, y las Juntas no tienen ese carácter. Por todas estas razones, la excepción de incompetencia carece de fundamento y pide la demandante que sea rechazada, como asimismo la petición de declarar nulo y sin valor lo obrado en este juicio, que es una consecuencia de la misma excepción.

Dejó para definitiva el Tribunal el fallo de esta excepción. No hubo avenimiento. No se recibió la causa a prueba por tratarse de una materia de mero derecho. A fojas 57, se declaró cerrado el proceso.

Considerando:

**A) Sobre la excepción de incompetencia:**

1.o) Que el artículo 598 del Código del Trabajo establece que en cada departamento habrá una Junta Permanente de Conciliación que conocerá de los conflictos colectivos que se susciten en él;

2.o) Que se desprende de esta disposición que la Junta debe entrar a desempeñar las funciones que la ley le ha señalado, cuando los empleados u obreros han planteado peticiones susceptibles de producir un conflicto colectivo del trabajo;

3.o) Que en el curso de autos, se ha producido controversia acerca de si las peticiones formuladas por los empleados particulares de la demandante han sido capaces de producir un conflicto colectivo legal, o sea, de aquellos de que trata el Código del Trabajo, ya que la demandante ha expresado en su demanda, que el pliego de peticiones que le han presentado sus empleados particulares es ilegal y que, por ende, no existe tal situación jurídica, situación que ha sido negada en absoluto por los demandados;



## NULIDAD DE PLIEGO DE PETICIONES

279

4.o) Que, en consecuencia, se ha producido una cuestión contenciosa, relativa a la aplicación de las disposiciones legales sobre conflictos colectivos contenidas en el Código del Trabajo la que, de conformidad con lo dispuesto en el número 1.o del artículo 497 del Código del Trabajo, debe ser resuelta por el Juzgado del Trabajo competente;

5.o) Que la circunstancia de que la petición de declaración de ilegalidad del pliego de peticiones haya sido formulada ante la Junta de Conciliación no puede, por ninguna circunstancia, impedir que las partes sometan el mismo asunto al conocimiento del Juzgado del Trabajo, ya que no puede decirse que la Junta de Conciliación ha prevenido en el conocimiento de esta cuestión y que, en consecuencia, se ha radicado en ella el conocimiento de esta materia, por cuanto, como es innecesario expresarlo, la Junta de Conciliación no es un Tribunal de Justicia, y, por lo tanto, no tienen, en este caso, aplicación las disposiciones pertinentes del Código Orgánico de Tribunales;

6.o) Que el hecho de que la demandante haya pedido a este Tribunal que declare ilegal el pliego de peticiones, no significa

que se haya arrogado las facultades que la ley le ha encomendado a la respectiva Junta de Conciliación, ya que el juicio no tiene por objeto entrar al estudio mismo del conflicto y tratar de obtener la conciliación de las partes en el conflicto mismo, sino que, como se ha dicho, tiene por objeto resolver la cuestión controvertida de si existe o no conflicto colectivo o de si algunas de las peticiones contenidas en el mencionado pliego son ilegales;

7.o) Que tampoco puede decirse que el Tribunal ha interferido el funcionamiento de la Junta en el conocimiento del conflicto planteado por los empleados particulares de la demandante, ya que la Junta no adoptó ninguna resolución sobre la cuestión previa planteada ante ese organismo, por la Compañía demandante, que es la misma materia del presente juicio y, en consecuencia, la Junta no puede entrar a desempeñar su cometido sino una vez que se resuelva en definitiva, por el Tribunal competente, que se ha producido un conflicto colectivo, resolución que, como se ha expresado en los considerandos anteriores, corresponde única y exclusivamente a este Tribunal;

8.o) Que igualmente procede desestimar la alegación de los de-



mandados, en orden a que esta demanda es un recurso entablado en contra de una resolución de la Junta de Conciliación, porque los recursos proceden sólo en contra de las resoluciones de los Tribunales y, como se ha dicho, la Junta en ningún concepto puede ser considerada como tal, y, además, porque la Junta, como se dijo anteriormente, no adoptó en esta materia ninguna resolución y este es el motivo preciso por qué se ha entablado el presente juicio;

9.o) Que por las razones dadas el Tribunal estima innecesario entrar en estudio teórico y práctico sobre la forma en que los demandados han planteado la excepción de incompetencia del Tribunal;

#### **B) Sobre el fondo de la causa:**

10.o) Que, como se ha expresado en líneas anteriores, el presente juicio tiene por objeto determinar si el pliego de peticiones presentado por los empleados particulares de Chile Exploration, que trabajan en Chuquicamata, a la demandante el 3 de Noviembre próximo pasado, ha provocado un conflicto colectivo legal o, si por el contrario, el pliego adolece en su totalidad de un vicio de ilegalidad o algunas de las peticiones

de él no han podido ser planteadas por contravenir disposiciones legales o por no ser materias susceptibles de provocar un conflicto colectivo;

11.o) Que la demandante solicita, en primer término y como petición principal, que se declare que el pliego citado es ilegal y nulo en su totalidad, fundando esta petición en la circunstancia de que el artículo 40 de la Ley 7.295 prohíbe a los empleados particulares para los cuales rigen los reajustes establecidos en dicha ley, presentar a sus empleadores pliegos de peticiones solicitando mejoramiento de las remuneraciones reajustadas, sino después de transcurrido un año de la fecha del último reajuste, y como dicho pliego contiene numerosas peticiones que contravienen a la citada disposición legal, debe concluirse —expresa la demandante— que todo el pliego es ilegal, ya que el hecho prohibido por la ley no es sólo la petición de mejoramiento de las remuneraciones, sino que la presentación en sí misma del pliego de peticiones en su totalidad;

12.o) Que es previo, en consecuencia, para resolver la petición principal de la demanda, determinar si el pliego contiene o no pe-

## NULIDAD DE PLIEGO DE PETICIONES

281

ticiones que adolezcan de la ilegalidad que se ha formulado;

13.o) Que sin entrar a un mayor estudio de todas y cada una de las peticiones que los empleados particulares de la demandante le han formulado y de la simple lectura del artículo 40 de la Ley 7.295 en relación con el pliego de peticiones de fojas 13 y siguientes, debe concluirse que, por lo menos, la petición designada con el N.º 1 del mencionado pliego contraviene abiertamente a la prohibición establecida en el ya referido artículo 40 de la Ley 7.295, que, como se ha visto en los anteriores considerandos, prohíbe a los empleados particulares que están afectos a sus disposiciones, presentar pliegos de peticiones en que soliciten mejoramiento de sus remuneraciones reajustadas, sino después de transcurrir un año de la fecha del último reajuste y, por lo tanto es ilegal, ya que contraviene a esta disposición por cuanto a la fecha de la presentación del pliego de peticiones no había transcurrido un año desde el 1.º de Enero de 1948, fecha en que se efectuó el último reajuste de sueldo conforme a lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley 7.295;

14.o) Que, a pesar de contener el pliego por lo menos, la petición

ilegal a que se refiere el considerando anterior, el Tribunal considera que el alcance del artículo 40 de la Ley 7.295 es simplemente el de prohibir a los empleados particulares a que se refiere dicha ley, que presenten pliegos de peticiones solicitando aumentos de las remuneraciones reajustadas, no teniendo así el carácter amplio que le da la demandante, en el sentido de que dichos empleados particulares no pueden provocar un conflicto colectivo aun cuando éste se refiere a materias que no están relacionadas con sueldos y demás remuneraciones anexas;

15.o) Que la demandante, para apoyar la primera petición de la demanda en orden a que se declare la ilegalidad total del pliego, expresa que todo pliego de peticiones es un todo indivisible, por lo que, conteniendo algunas peticiones ilegales, debe ser ilegal el pliego en su totalidad;

16.o) Que el artículo 44 del Reglamento N.º 839, de 30 de Noviembre de 1944, dictado por el Presidente de la República en uso de la autorización contenida en el artículo 643 del Código del Trabajo, establece que al entrar la Junta a conocer el pliego de peticiones, debe clasificar las pe-

ticiones en dos grupos: 1.o—Las que signifiquen cuestiones relativas a la mera aplicación de las leyes o reglamentos; y 2.o—Las que importen reivindicaciones económico-sociales que la ley no imponga o determine y que están entregadas a la voluntad de las partes en conflicto;

17.o) Que de la recién citada disposición, fluye en forma nítida que cada una de las peticiones contenidas en el pliego es un hecho independiente de las demás y puede ser estudiada y tratada independientemente de las otras;

18.o) Que, de acuerdo con lo que se ha expresado en las consideraciones precedentes, debe rechazarse la petición contenida en la demanda relativa a que se declare que el pliego es ilegal y nulo en su totalidad y que, como consecuencia de esto, procede, también, el rechazo de la segunda petición, esto es, que se declare que el pliego de peticiones en cuestión, no ha producido la existencia de un conflicto colectivo;

19.o) Que, procede, en consecuencia, entrar al estudio de cada una de las peticiones contenidas en el pliego de fojas 13 a fin de resolver cuáles de ellas son con-

trarias a las disposiciones legales y declararlas ilegales;

20.o) Que el artículo 40 de la Ley 7.295, prohíbe a los empleados particulares presentar pliegos colectivos de peticiones solicitando mejoramiento de las remuneraciones reajustadas, sino después de transcurrir un año de la fecha del último reajuste;

21.o) Que, en consecuencia, las peticiones contenidas en el pliego referentes a aumentos de sueldos y todas las demás que signifiquen por cualquier medio un aumento de las remuneraciones de los demandados, adolecen del vicio de ilegalidad y no han podido provocar un conflicto colectivo;

22.o) Que, igualmente, deben ser declaradas ilegales aquellas peticiones que, si bien no significan un aumento de las remuneraciones del empleado, tienden a aumentar el presupuesto de éstos, evitándoles incurrir en los respectivos gastos;

23.o) Que, por lo tanto, el Tribunal considera que son ilegales las peticiones signadas con los N.os 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 19, 20, 21, 22, 25, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 38, 42, 46, 47 letra a), 52 y 54;

## **NULIDAD DE PLIEGO DE PETICIONES**

**283**

24.o) Que, en lo que respecta a las demás peticiones del pliego, el Tribunal estima que los empleados las han podido legalmente formular, ya que no hay ley alguna que les impida presentarlas y todas ellas, con las excepciones que se indicarán en el siguiente considerando, tienen estrecha relación con los respectivos contratos de trabajo y con las actuales condiciones de vida y de trabajo existentes en el mineral de Chuquicamata:

25.o) Que las peticiones contenidas en los N.os 49 y 50 no han podido ni debido ser presentadas por los demandados a la Compañía demandante, por cuanto ellas se refieren a una persona totalmente extraña a la Compañía demandante.

Y visto, además, lo dispuesto en los artículos 497, 539 y 540 del Código del Trabajo, se declara que ha lugar a la demanda de fojas 19, sólo en cuanto se declaran ilegales y, por lo tanto, no susceptibles de provocar un conflicto colectivo, las siguientes peticiones: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 19, 20, 21, 22, 25, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 38, 42, 46, 47, letra a), 49, 50, 52, y 54. Estas peticiones deberán ser retiradas por

los empleados demandados del respectivo pliego de peticiones.

Cada parte pagará sus costas y las comunes por mitad.

Anótese, notifíquese, pagándose los impuestos que pueden adeudarse, y archívese oportunamente.

Fernando Díaz Arismendi.

Pronunciada por el señor Juez titular del Trabajo de Calama, don Fernando Díaz Arismendi.—  
Luis Barrales, Secretario.

### **Sentencia de Segunda Instancia**

Iquique, diecinueve de Febrero de mil novecientos cuarenta y nueve.

Vistos:

Reproduciendo la parte expositiva de la sentencia apelada, agregando a continuación del considerando 4.o la frase: "dado el impasse producido en la Junta de Conciliación de Calama", eliminando sus considerandos 5 a 9 inclusivos, 23 y 24 y teniendo presente;

Que a fojas 9 rola el certificado expedido por el Secretario de la



Junta de Conciliación del Departamento de El Loa, y del que consta el impasse producido en dicho organismo, debido a que no fué posible el pronunciamiento acerca de la solicitud de ilegalidad del pliego de peticiones por la Compañía demandante, por haberse producido un empate de tres votos contra tres;

Que el procedimiento que se deriva de las disposiciones legales y reglamentarias, en materia de competencia, en relación con la cuestión principal planteada en la demanda, no es otro que el siguiente: corresponde a la Junta de Conciliación respectiva el pronunciamiento, y sólo en los casos en que ésta no reúna el quórum necesario para hacer dicho pronunciamiento, —caso ocurrido a la de Calama— o en que alguna de las partes no esté conforme con lo que resolviera la Junta, en esta materia, corresponde a los Tribunales del Trabajo dilucidar la cuestión acerca de la legalidad o ilegalidad del planteamiento, del conflicto y de los efectos jurídicos de éste, conforme a las disposiciones correlacionadas de los artículos 497 (418), 590 (511) del Código del Trabajo, 50 de la Ley 7.295, y 44 y 76 del Reglamento N.º 839, sin que ello importe, en estas condiciones, inter-

ferir las facultades de la Junta, —como sostiene la parte demandada— porque prácticamente no se habría incoado el proceso de conciliación del conflicto, que exige, para la no interferencia de otras autoridades, la última disposición reglamentaria citada;

Que establecida así la competencia, el primer asunto que debe aclararse es el que se refiere al alcance jurídico de la frase contenida en el artículo 590 del Código del Trabajo, que dice: "se produzca una cuestión susceptible de provocar un conflicto de orden colectivo", porque de su letra y del espíritu que anima a la legislación social vigente, que define a las organizaciones sindicales como "instituciones de colaboración mutua entre los factores que contribuyen a la producción" (artículo 364), se infiere a contrario sensu, que existen cuestiones que no son capaces de provocar conflictos de esta naturaleza;

Que, desde luego, por razones obvias y lógicas, que se basan en las disposiciones del Código que establecen organismos estatales (Dirección General e Inspecciones Provinciales y Departamentales del Trabajo) encargados de supervigilar y fiscalizar el cumplimiento de sus disposiciones, las



## NULIDAD DE PLIEGO DE PETICIONES

285

cuestiones de carácter simplemente jurídico encaminadas a hacer cumplir las leyes y reglamentos, no son susceptibles de provocar un conflicto colectivo, y tanto es así que el Reglamento N.º 839, en sus artículos 3 y 44 N.º 2, en relación con el artículo 590 del Código del Trabajo, se refiere a peticiones de orden económico-sociales. En cambio, el N.º 1 del citado artículo 44 contempla aquellas peticiones del pliego relativas a la mera aplicación de las leyes y reglamentos, y dispone que deben clasificarse así por la Junta para el efecto de ponerlas en conocimiento (artículo 45) de la respectiva Inspección del Trabajo a fin de que ésta exija su cumplimiento y formule la denuncia que procediere;

Que de lo antes expuesto fluye, con mayor razón, que tampoco son procedentes las peticiones contenidas en el pliego en que se plantean cuestiones de derecho, que importan introducir reformas legales o reglamentarias (con exclusión del reglamento interno), ya que sólo incumbe al legislador y colegislador dictar normas de esta naturaleza, con fuerza obligatoria, dentro de una empresa. Cabe considerar, además, que no es el conflicto colectivo el medio

adecuado para lograr esas reformas pues la eliminación del conflicto legal que consiste en el derecho de huelga, no podría ejercitarse por su manifiesta ilegalidad, pues la negativa del empleador a otorgar las reformas que se solicitaren se encontraría amparada por la misma ley que solamente lo obliga a cumplir con las disposiciones legales y reglamentarias vigentes;

Que, igualmente, no proceden aquellas peticiones que se presentan durante la vigencia de un fallo arbitral, en todas aquellas cuestiones que hubieren sido resueltas en el laudo respectivo; y tampoco las que alteren, durante su vigencia, el avenimiento a que hubieren llegado las partes, en conflicto ante la Junta de Conciliación, o en forma directa, de acuerdo con el artículo 52 del Reglamento N.º 839;

Que también no son susceptibles de provocar un conflicto colectivo, aquellas peticiones de orden económico-sociales que no digan relación directa ni indirecta con el vínculo contractual ni con las condiciones de vida y modalidad del trabajo que rijan dentro de la Empresa;

Que son ilegales, además, los pliegos de peticiones que se pre-

senten sin haberse cumplido con los requisitos establecidos en la ley y reglamento, o aquellos en que se hubieren omitido los trámites previos, porque dichos requisitos y trámites atañen directamente a la existencia o inexistencia jurídica del conflicto;

Que, finalmente, son improcedentes también aquellas peticiones contenidas en el pliego y cuya atención corresponda al Estado, al Municipio o a otros organismos;

Que las peticiones de orden económico - sociales susceptibles de provocar conflictos colectivos, consisten, las de carácter económico, en la solicitud de aumento de las remuneraciones en general, contempladas en el artículo 139 del Código del Trabajo, para los empleados particulares, y que abarcan tanto el sueldo estipulado en el contrato, la comisión y la participación, como las bonificaciones y beneficios que se otorgan en especie o en dinero. El sobre-sueldo y la gratificación, —comprendidas también en el término genérico de remuneraciones—, tienen en la ley señaladas tanto la oportunidad en que proceden como su monto y forma de pago, de manera que no pueden ocasionar conflicto colectivo;

y las de carácter social, consisten en todas aquellas cuestiones (excluidas las remuneraciones) que se relacionen, directa o indirectamente, con el bienestar que debe rodear al trabajo en sus diversas modalidades y condiciones;

Que el artículo 40 de la Ley 7.295 prohíbe a los empleados presentar a sus empleadores pliegos colectivos de peticiones solicitando mejoramiento de las remuneraciones reajustadas si no ha transcurrido un año desde la fecha del último reajuste; y éste se hizo, según consta de autos, el 1.º de Enero de 1948, y el pliego de peticiones de fojas 13 fué presentado y entregado con fecha 3 de Noviembre del mismo año, o sea, antes de haber transcurrido el plazo señalado;

Que los actos que la ley prohíbe son nulos y de ningún valor, salvo en cuanto se designe expresamente otro efecto que el de nulidad para el caso de contravención;

Que no es procedente, sin embargo, aceptar la nulidad integral del pliego de peticiones, como lo solicita la demandante en el número 1 de la parte petitoria de la demanda, basándose en el artículo 40 de la Ley 7.295, porque la fa-

## NULIDAD DE PLIEGO DE PETICIONES

287

cultad que tiene la Junta de Conciliación de hacer la clasificación previa de las cuestiones contenidas en el pliego, en la forma que se establece en el artículo 44 del Reglamento 839, y la obligación que pesa sobre dicho organismo de desestimar las peticiones que contravengan aquella disposición —no las otras—, está demostrando el proceso de eliminación de materias improcedentes, sin que esta eliminación surta el efecto de nulidad total del pliego, ya que la Junta debe continuar conociendo de las demás cuestiones planteadas en el conflicto y que sean procedentes;

Que de todo lo anteriormente dicho se infiere que del pliego de peticiones que rola a fojas 15, son improcedentes las que se mencionan a continuación: la del N.º 1, por infringir el texto del artículo 40 de la ley 7.295, que no permite hacer peticiones de aumentos de remuneraciones antes de transcurrido un año del respectivo reajuste; la del N.º 2, porque representa una reforma del artículo 20 de la misma ley; las de los números 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13, por constituir modificaciones a las remuneraciones reajustadas; las de los números 14, 15, 16, 17, y 18, por importar nuevos gravámenes que sólo pueden es-

tablecerse por la ley o la simple voluntad del empleador; las de los números 19, 20, 21, 22, 24, 25, 30, 31, 33, 34 y 35, por significar directa o indirectamente, aumento de las remuneraciones reajustadas; la del número 37, porque la Ley 7600, de 20 de Octubre de 1943, en su artículo 16, sólo impone a las empresas industriales y mineras que paguen impuesto a la renta de la 3.ª y 4.ª categorías la obligación de entregar anualmente a la Caja de la Habitación Popular el 5% de sus utilidades, con el fin de construir nuevas casas habitaciones; las de los números 38, 42, 46 y 47 letra a), porque importan indirectamente aumento de la remuneración reajustada; las de los números 49 y 50, porque no se refieren a un empleado de la empresa; y las de los números 52 letra a) y 54, en su primer inciso, porque importan modificación a la remuneración reajustada;

Que, en cambio, son procedentes las peticiones signadas en el documento de fojas 13 con los números 23, 26, 27, 28, 29, 32, 36, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 47 letra b), 48, 51, 52 letra b), 53 y 54 letras a), b) y c) porque no importan peticiones de aumento de remuneración reajustada y sólo tienen el carácter de índole so-

cial encaminadas a mejorar las condiciones de vida en el trabajo.

Por estas consideraciones, se confirma la sentencia apelada de fecha 20 de Enero pasado, escrita desde fojas 58 a fojas 69 vuelta, con las siguientes declaraciones:

1.o) Que no procede declarar la nulidad de la sentencia apelada por la supuesta falta de decisión de la excepción de incompetencia del Tribunal alegada en la contestación de la demanda, porque del considerando 4.o de dicha sentencia se infiere que el Juez estimó su competencia, aun cuando procesalmente en su parte resolutive no lo haya expresado;

2.o) Que el Tribunal del Trabajo es competente para conocer de las cuestiones deducidas en la demanda, en mérito de lo expuesto en los considerandos de este fallo;

3.o) Que ha lugar a la demanda, sin costas, acogiendo la petición subsidiaria N.o 2 del escrito de apelación de fojas 71, sólo en cuanto se declara que no son cuestiones susceptibles de provocar un conflicto colectivo las peticiones del pliego de fojas 13 signadas con los N.os 1, 2, 3,

4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 30, 31, 33, 34, 35, 37, 38, 42, 46, 47, letra a), 49, 50, 52, letra a), y 54 en su primer inciso; y

4.o) Que, en cambio, son procedentes las peticiones del mismo pliego signadas con los N.os 23, 26, 27, 28, 29, 32, 36, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 47 letra b), 48, 51, 52 letra b), 53, 54, en sus letras a), b) y c).

El Juez de la causa hará remitir a este Tribunal la suma de cincuenta y seis pesos (\$ 56.—) en estampillas de impuesto para agregarlos al copiador de sentencias en la parte que corresponde a este fallo.

Anótese, devuélvase y reemplácese el papel en primera instancia.

T. Romero H. — L. Peralta V.  
—P. Muga G.

Pronunciada por la Ilustrísima Corte del Trabajo de Iquique, integrada por su Presidente, Ministro don Tomás Romero Hodges, por el vocal empleador abogado don Luis Peralta Vásquez y por el vocal empleado, don Pedro Muga González. N. N. Secretario.